

**Comentarios de la Directora de la USAID, Elena L. Brineman
en el encuentro con el Dr. Leonel Fernández**

**24 de marzo del 2004
Hotel Jaragua, Salón Anacaona**

- **Dr. Leonel Fernández, candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana**
- **Participantes e invitados**
- **Miembros de la prensa**
- **Amigos, todos.**

Es un honor para mí estar con ustedes aquí hoy. Quisiera agradecer una vez más a la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) por invitarme a dar los comentarios de apertura al inicio de esta segunda serie de reuniones importantes, donde los candidatos presidenciales del 2004 discutirán sus plataformas de lucha contra la corrupción. La Embajada de los Estados Unidos de América en la República Dominicana se siente orgullosa de trabajar con FINJUS, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el patrocinio de este evento, ya que creemos que la buena gobernabilidad es vital para una democracia y economía sólida. Dentro de nuestro programa en la República Dominicana alentamos la buena gobernabilidad y la transparencia, así como la fortaleza de los mecanismos e instituciones para luchar contra la corrupción.

Por medio de estos encuentros, FINJUS ofrece a los candidatos presidenciales la oportunidad de presentar al pueblo dominicano sus propuestas para combatir la corrupción y examinar su efecto devastador sobre la economía, las instituciones democráticas y, en ultima instancia, sobre la fe y la confianza que tiene la ciudadanía en las propias bases del sistema político y económico dominicano. Los ciudadanos tendrán la oportunidad de juzgar los méritos de cada propuesta.

Esta mañana nos honramos en darle la bienvenida al candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, el Dr. Leonel Fernández. El Dr. Fernández será el segundo candidato en presentar cómo, de ser electo, su administración contempla combatir la corrupción en la República Dominicana.

Hice comentarios de apertura al inicio de esta serie de reuniones y discutí cómo la corrupción mina los pilares de las instituciones democráticas. Hoy, haré unos breves comentarios sobre cómo la corrupción tiene un efecto corrosivo similar sobre la economía.

Un cúmulo creciente de estudios académicos durante la década pasada establece el fuerte vínculo entre el impacto negativo de la corrupción y la tasa de crecimiento económico de una nación. Por ejemplo, los estudios muestran que la corrupción tiene un impacto negativo en las inversiones tanto del sector extranjero como el nacional que, a mediano y largo plazo, causa un descenso substancial en el crecimiento económico. Los países que practican la buena gobernabilidad arrojan cifras más altas de ingresos per cápita. Un estudio del Banco Mundial mostró que un aumento del uno por ciento en la tasa de sobornos está asociado a una reducción del tres por ciento en la tasa de crecimiento de un negocio. Cuando hay complicidad entre la empresa y el gobierno al adoptar políticas decisorias para compartir los beneficios de actividades corruptas surge una forma de corrupción que es aún más peligrosa para una sociedad. Esta situación se denomina la “economía cautiva del Estado”. Un estudio del Banco Mundial demostró que la tasa general de crecimiento de las empresas en una economía de este tipo es un 10 por ciento más baja que en una economía no cautiva.

En pocas palabras, para generar el crecimiento los negocios deben usar su capital, y un gobierno su presupuesto de manera productiva. Cuando el capital empresarial o los fondos públicos se desplazan hacia transacciones no económicas (por ejemplo, sobornos o pagos al gobierno para cubrir pérdidas en casos de fraude financiero), se detiene el crecimiento económico. La corrupción distorsiona los incentivos al crecimiento al descarrilar a los productores de bienes y servicios más eficientes y efectivos. La ventaja que el sobornador recibe no está basada en el valor que trae al mercado, sino en las conexiones políticas y la habilidad de engrasar las ruedas de las decisiones políticas. Queda claro que es más difícil competir efectivamente en una economía global abierta cuando un negocio tiene que funcionar en un ambiente corrupto de negocios, particularmente donde existe la complicidad entre el gobierno y las empresas.

El Informe Global de Competitividad distribuye a los países bajo el criterio de su competitividad económica, basado en las respuestas que

dan los empresarios y ejecutivos destacados a una serie de preguntas sobre el ambiente en que trabajan. En relación a la pregunta sobre pagos extra o sobornos ligados a influir en leyes y políticas, reglamentos o decretos, la República Dominicana quedó en el puesto 90 de 102 países, un poco mejor que Bangladesh, pero peor que Nigeria, Panamá, Nicaragua y Venezuela. Los perdedores en esta economía distorsionada incluye a los trabajadores dominicanos que podrían recibir sueldos más altos si trabajaran para un negocio más competitivo; los consumidores y ciudadanos que podrían recibir mejores bienes y servicios; y, a nivel social, la economía e instituciones democráticas de la nación.

Por supuesto, aquellos entre ustedes aquí reunidos que están sufriendo los efectos de los fraudes bancarios de Baninter, Bancrédito y otros no necesitan oír que hay estudios para probar que la corrupción tiene un impacto negativo sobre la economía ni que la interacción entre el gobierno y los negocios a menudo no es transparente ni responsable. Las repercusiones de Baninter y otros supuestos casos de fraude bancario se han sentido y seguirán sintiéndose en toda la sociedad dominicana. Estos casos han conmovido las bases tanto de la economía y las instituciones democráticas dominicanas al revelar las debilidades en las agencias regulatorias del gobierno y la posible complicidad entre empresas y gobierno que abarca varias administraciones dominicanas. Los casos deben ser investigados a profundidad y juzgados de manera imparcial y transparente de modo que todos los dominicanos recuperen la confianza en sus instituciones, su economía y su sistema político.

Luchar contra la corrupción y la complicidad entre el gobierno y el sector privado es un reto enorme. ¿Cuál es la mejor forma de que la República Dominicana se asegure de que la corrupción no marque los tratos entre empresa y gobierno, y que se pueda recuperar la fe perdida en sus instituciones democráticas? Es indispensable un nuevo enfoque en las medidas que aseguren instituciones gubernamentales regulatorias transparentes y responsables, el apego al estado de derecho, y la competencia justa sin prerrogativas. Esto requiere, entre otras cosas, un sistema de justicia fuerte, independiente y competente, así como la vigilancia de la sociedad civil para garantizar la buena gobernabilidad.

Ciertas reformas legales e institucionales recientes son primeros pasos prometedores. El Estatuto de la Carrera del Ministerio Público está diseñado para asegurar la selección de fiscales bajo criterios de mérito y

no de política. Otros cambios positivos han sido la promulgación de la Ley de Libertad de la Información; la promulgación de la Ley de Cámara de Cuentas; el establecimiento de la Oficina de la Defensa Pública, y el apoyo que ha recibido del Poder Judicial. El Congreso y el Ejecutivo han dado pasos durante los últimos dos años para que el presupuesto público sea más transparente y orientado a resultados, para reducir el tamaño y el alcance de la infame Cuenta 1401, y para implementar un sistema integrado de administración de las finanzas públicas. Los casos de fraude bancario con alta visibilidad (como el caso de Baninter y Bancrédito) siguen bajo investigación. Las personas responsables deben ser procesadas de forma imparcial y transparente, de modo que todos los dominicanos recuperen la confianza en sus instituciones, su economía y su sistema político. Esperamos escuchar cómo el candidato presidencial Fernández continuará estos primeros pasos y cómo se propondrá servir de ejemplo en la lucha contra la corrupción.

El próximo presidente enfrentará el reto de una crisis financiera, pero más aún el reto de una crisis de confianza. Esperamos continuar nuestro trabajo de apoyo en la lucha por garantizar unas instituciones públicas honestas, competentes y orientadas a la ciudadanía en la República Dominicana. Muchas gracias.